



ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA

Núm. 94  
Valencia  
2019

# ANALES

DE LA

## REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA

**Presentación. Sociedad, Gobierno y Administración en la Comunidad Valenciana**  
*Federico Martínez Rosa*

**Prólogo propedéutico. Sociedad, Gobierno y Administración. Historia administrativa**  
*Javier Pinazo Hernández*

**Políticas públicas y programas de aprendizaje a lo largo de la vida en Valencia**  
*Sacramento Pinazo Hernández / Julián Montoya Rodríguez /  
Javier Bendicho Montés / María Jiménez Martí y Manuela Torregrosa Ruiz*

**Algunas consideraciones sobre la competencia de la Comunitat Valenciana en materia de dret privat**  
*José Bonet Navarro*

**Los gremios artesanales de la ciudad de Valencia: pasado y presente**  
*María Ángeles Carabal-Montesguad / Blanca de Miguel Molina y Virginia Santamarina Campos*

**Participación ciudadana en la tramitación de los planes urbanísticos municipales**  
*Ignacio Sevilla Merino*

**El futuro en la Comunidad Valenciana de los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español**  
*Benigno Beneyto Berenguer*

**Presente y futuro de la mediación como método alternativo de solución de conflictos en la Comunitat Valenciana**  
*Jorge Sánchez-Tarazona y Marcelino*

**El nivel local en la articulación de la organización territorial valenciana**  
*César Herrero Pombo*

**El síndic de greuges, una garantía institucional de los derechos de la sociedad valenciana**  
*José Carlos de Bartolomé Cenzano*

**El carácter bifronte del poder judicial. Una mirada a la Administración de justicia en la Comunidad Valenciana**  
*Victoria Rodríguez Blanco*

**Aportaciones del pensamiento valenciano para la teoría del Gobierno y Administración española y europea**  
*Javier Pinazo Hernández*

**El politólogo al servicio de las instituciones políticas de la Comunitat Valenciana**  
*Blanca Nicasio Varea y Marta Pérez Gabaldón*

**La institucionalización de la evaluación de las políticas públicas en la Comunidad Valenciana: una necesidad inaplazable**  
*Daniel Catalá Pérez y María de Miguel Molina*

**La policía en la Comunidad Valenciana**  
*Manuel Rodríguez Herrera*

**La función pública autonómica o el velo de Penélope**  
*Eduardo Costa Castellá*

**E-Administración y la nueva normativa**  
*Concepción M<sup>a</sup> Domínguez García*



Núm. 94 • VALENCIA • 2019

**Definición de Anales:**

*"Idea acariciada hace tiempo por nosotros era la publicación de una Revista que fuese instrumento principal para la propaganda, conservación y publicidad de los trabajos que se hagan en beneficio de la cultura general valenciana, especialmente en lo referente al estudio de su historia, en todas sus diversas manifestaciones".*

Texto de la presentación del nº 1 de Anales (1928)

**CONSEJO DE REDACCIÓN:**

Director: *Jaime Siles Ruiz*

Secretario: *Guillermo Carnero Arbat*

Jefe de Redacción: *Manuel López Pellicer*

José Andrés Gallego (CSIC), Xaverio Ballester Gómez (UVEG), Desamparados Cabanes Pecourt (RACV), Enrique Claver Cortés (Universidad de Alicante), Manuel Chueca Pazos (RACV), Federico Martínez Roda (RACV, Decano), Enrique de Miguel Fernández (RACV), Francisco Díaz de Castro (Universidad de Baleares), Carlos Gener Galbis (RACV), Antonio Melero Bellido (UVEG), Paolo Merlini (Università IUAV di Venezia), José Manuel Vela Bargues (RACV).

**CONSEJO ASESOR**

José Adolfo de Azcárraga (UVEG), Antonio Alvar Ezquerro (Universidad de Alcalá de Henares), Ana Belén Anquela Julián (Universidad Politécnica de Valencia), Mariano Ayuso Ruiz-Toledo (Magistrado excedente), María José Báguena Cervellera (UVEG), Mariano Bolant Serra (Colegio Territorial de Arquitectos Valencia, Vicepresidente), José Carrasco Galán (Universidad Politécnica de Madrid), Dolores Cortina Orts (CEU San Pablo), Joaquín Criado Costa (Universidad de Córdoba), Jesús de la Villa Polo (Universidad Autónoma de Madrid), Francisco Javier Díez de Revenga (Universidad de Murcia), Luis Miguel Enciso Recio (Real Academia de la Historia), Antonio Fernández Alba (Real Academia Española), Alejandrino Gallego Rodríguez (Universidad Politécnica de Cartagena), Antonio Gallego Gallego (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), Francisco García García (Universidad Politécnica de Valencia), Fernando García Romero (Universidad Complutense de Madrid), Vicente Gomar Escrivá (Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir), José Herráez Boquera (Universidad Politécnica de Valencia), Javier Iso Echegoyen (Universidad de Zaragoza), José María Maestre Maestre (Universidad de Cádiz), Antoni Marí Muñoz (Universidad Pompeu Fabra), Manuel Marín Ferrer (Hospital de la Ribera, Director), José Luis Moralejo Álvarez (Universidad de Alcalá de Henares), José Vicente Morata Estragués (Cámara de Comercio de Valencia, Presidente), Pablo Navarro Esteve (Universidad Politécnica de Valencia), Juan María Núñez González (Universidad de Oviedo), María Jesús Recio Sánchez (Colegio de Doctores y Licenciados de Valencia, Decana), Juan Rovira Soler † (Universidad Politécnica de Valencia), Eustaquio Sánchez Salor (Universidad de Extremadura), Ramón Serra de Alzaga (Museo San Pío V), Roberto Villa García (Universidad Rey Juan Carlos).

## REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

C/. Avellanas, 26. 46003 Valencia. Tel. 96 391 69 65.  
E-mail: [secretari@racv.es](mailto:secretari@racv.es). Sitio web: [www.racv.es](http://www.racv.es)

## CORRESPONDENCIA

Estudios y artículos (por duplicado en papel y bajo soporte informático), deben dirigirse a la Redacción.

## BASE DE DATOS ISOC

"Anales de la Real Academia de Cultura Valenciana" se ha publicado ininterrumpidamente desde su fundación en 1928 hasta la actualidad. Está referenciada en la base de datos ISOC del CSIC, en los sistemas de evaluación DICE, CIRC

y RESH, y en los catálogos de Latindex y Dialnet. Ha sido evaluada por ANECA y CNEAI. Cuenta con un sistema de revisores externos para la selección de originales.

## EDITA

Real Academia de Cultura Valenciana.

## MIEMBRO DE:



## COLABORAN:



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA



ISSN: 1130-426X

Depósito Legal: M.3559-1958

Imprime: Artes Gráficas Soler, S.L. [www.graficas.soler.com](http://www.graficas.soler.com)

## ÍNDICE

PRESENTACIÓN. SOCIEDAD, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA .....	7
<i>Federico Martínez Roda</i>	
PRÓLOGO PROPEDEUTICO. SOCIEDAD, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. HISTORIA ADMINISTRATIVA .....	9
<i>Javier Pinazo Hernandis</i>	
<b>ESTUDIOS</b>	
POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA EN VALENCIA .....	33
<i>Sacramento Pinazo Hernandis, Julián Montoro Rodríguez, Javier Bendicho Montés, María Jiménez Martí y Manuela Torregrosa Ruiz</i>	
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA COMPETENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN MATÈRIA DE DRET PRIVAT .....	63
<i>José Bonet Navarro</i>	
LOS GREMIOS ARTESANALES DE LA CIUDAD DE VALENCIA: PASADO Y PRESENTE .....	91
<i>María Ángeles Carabal-Montagud, Blanca de Miguel Molina y Virginia Santamarina Campos</i>	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TRAMITACIÓN DE LOS PLANES URBANÍSTICOS MUNICIPALES .....	117
<i>Ignacio Sevilla Merino</i>	
EL FUTURO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA DE LOS ACUERDOS ENTRE LA SANTA SEDE Y EL ESTADO ESPAÑOL .....	139
<i>Remigio Beneyto Berenguer</i>	
PRESENTE Y FUTURO DE LA MEDIACIÓN COMO MÉTODO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA .....	171
<i>Jorge Sánchez-Tarazaga y Marcelino</i>	
EL NIVEL LOCAL EN LA ARTICULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL VALENCIANA .....	201
<i>César Herrero Pombo</i>	

EL SÍNDIC DE GREUGES, UNA GARANTÍA INSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD VALENCIANA .....	233
<i>José Carlos de Bartolomé Cenzano</i>	
EL CARÁCTER BIFRONTE DEL PODER JUDICIAL. UNA MIRADA A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA .....	263
<i>Victoria Rodríguez Blanco</i>	
APORTACIONES DEL PENSAMIENTO VALENCIANO PARA LA TEORÍA DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA Y EUROPEA .....	285
<i>Javier Pinazo Hernandis</i>	
EL POLÍTÓLOGO AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA .....	307
<i>Blanca Nicasio Varea y Marta Pérez Gabaldón</i>	
LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: UNA NECESIDAD INAPLAZABLE .....	329
<i>Daniel Catalá Pérez y María de Miguel Molina</i>	
LA POLICÍA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: DE LA COMPAÑÍA DE FUSILEROS DEL REINO DE VALENCIA AL CUERPO ÚNICO DE POLICÍA .....	369
<i>Manuel Rodríguez Herrera</i>	
LA FUNCIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA O EL VELO DE PENÉLOPE ....	403
<i>Eduardo Costa Castellá</i>	
E-ADMINISTRACIÓN Y LA NUEVA NORMATIVA: REFLEXIONES EN TORNO A SU IMPACTO EN EL TEJIDO ADMINISTRATIVO Y SOCIAL VALENCIANO .....	429
<i>Concepción M<sup>a</sup> Domínguez García</i>	
AUTORES DE LOS ARTÍCULOS .....	453
VIDA ACADÉMICA .....	463
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CURSO ACADÉMICO DE LA RACV 2018-2018 .....	465
<i>Francisco Javier Domínguez Rodrigo</i>	
NECROLÓGICAS .....	483

## PRESENTACIÓN

### SOCIEDAD, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

El presente monográfico es obra de personas a las que les une de una parte, la verdad científica, la honestamente investigada, y de otra parte, todos conocen el terreno que pisan, por ser personas que han vivido en las arenas de investigación desde la academia o profesionalmente desde la Constitución de 1978 y la subsiguiente autonomía en nuestra región valenciana hasta nuestros días. Conocen la situación de de las cuestiones que abordan desde un vínculo generacional que permite una intelección de la realidad político-administrativa valenciana que los veintiún autores articulan en los diecisiete trabajos que contiene este número 94 de los anales.

Las instituciones, que se entienden en un sentido amplio, como reglas, normas, costumbres de operatividad del sistema sociopolítico, se agrupan por temas afectantes a la Sociedad a su Gobierno y a la Administración como instrumento vicarial y de acción de las decisiones políticas para tratar de solucionar los problemas. Dicho de otra manera, si se sigue un enfoque sistémico-funcional y heterofinalista la Administración Pública instrumenta para otros las decisiones del gobierno para cumplir los fines del Estado recogidos positivamente en las estructuras institucionales y en las legislativas coyunturales partisanas, sometidas a las primeras.

Espero que al lector le suceda como a mí tras la lectura, saber mucho más sobre nuestra tierra valenciana, en la que el término valenciano sigue fielmente el sentido del origen de la academia en 1915 y sus posteriores adaptaciones de 1978 y 1991. En suma una entidad que ha trabajado por la lengua y cultura propias de los valencianos, consecuencia de la consolidación de la *Renaixença Valenciana*.

*En Valencia a enero de 2019*

FEDERICO MARTÍNEZ RODA

- SITGES, Esther, LORENTE, Raquely y SAORÍN, M. Jesús. "Promoción y formación del voluntariado con personas mayores en la universidad española". *International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología*, II, 2 (2018), 99-116.
- STADELHOFER, Carmen. "El significado de la formación general científica permanente para adultos mayores en el umbral del siglo XXI" en Bru Ronda, C. et al., *Los Modelos Marco de Programas Universitarios para mayores*, Alicante, Universidad Permanente de Alicante, 2005, 89-110.
- TRILLA, J. *Animación sociocultural. Teorías, programas y ámbitos*. Barcelona, Ariel Educación, 2004.
- VALENTINE, T. "United States of America: The current predominant of learning for the job" (P. Belanger y S. Valdivieso, eds.), *The emergence of learning societies: Who participates in adult learning?*, 1997, New York, Elsevier.
- VARGAS, Carlos. "Lifelong Learning principles and higher education policies". *Timing Journal for Higher Education*, II, 1 (2014), 91-105.
- . *El Aprendizaje a lo largo de toda la vida desde una perspectiva de justicia social*. Paris, UNESCO, 2017. Recuperado de <https://es.unesco.org/node/262744>
- VÁZQUEZ, Manuel y FERNÁNDEZ, Cristina. "Aprendizaje universitario y personas mayores. El Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla". *Escuela Abierta. Revista de Investigación Educativa*, 3, III (1999), 33-54.
- VEIGA, Jose A. "La formación de personas adultas en la Comunidad Valenciana. Algunos apuntes para la reflexión/acción". *El Diario*, 2016. Recuperado de [http://www.eldiario.es/cv/argumentos/formacion-personas-Comunidad-Valenciana-reflexionaccion\\_6\\_593250674.html](http://www.eldiario.es/cv/argumentos/formacion-personas-Comunidad-Valenciana-reflexionaccion_6_593250674.html)
- VILLAR, Feliciano, PINAZO-HERNANDIS, Sacramento, TRIADÓ, Carme, SOLÉ, Carme, MONTORO, Julian y CELDRÁN, Montse. *Evaluación de programas universitarios para mayores: motivaciones, dificultades y contribuciones a la calidad de vida*. Madrid, IM-SERVO, *Estudios de I+D+i*, 2006. Recuperado de <http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/imsero-estudiosidi-50.pdf>
- VILLAR, Feliciano y CELDRÁN, Montse. "Learning in later life: participation in formal, non-formal and informal activities in a nationally representative Spanish sample". *European Journal of Ageing*, X, 2 (2013), 135-144.
- VILLAR, Feliciano, PINAZO-HERNANDIS, Sacramento, TRIADÓ, Carme, CELDRÁN, Montse y SOLÉ, Carme. "Older people's university students in Spain: a comparison of motives and benefits between two models". *Ageing and Society*, XXX, 8 (2010), 1357-1372.
- ZULAIKA, Rafael. "Los DEAC, una apuesta de futuro", *Museos para la participación*, Manuel Mosquera Cobian (coord.), A Coruña, Museo de Belas Artes da Coruña, 2009.

JOSÉ BONET NAVARRO

### Algunes consideracions sobre la competència de la Comunitat Valenciana en matèria de dret privat

## ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE LA COMPETÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN MATÈRIA DE DRET PRIVAT

**Resum:** L'abolició dels furs perpetrada en 1707 adquireix renovada vigència a través de la restrictiva interpretació que realisa el Tribunal Constitucional de l'article 149.1.8 de la Constitució espanyola, a pesar de la voluntat inequívoca i democràticament manifestada en l'Estatut d'Autonomia Valencià. Actualment concorren raons suficients per a defensar una reforma constitucional que ofereixca una resposta adequada a les reivindicacions de la Comunitat Valenciana en esta matèria.

**Palabras clave:** Dret Civil Valencià, furs de València, competència legislativa, Generalitat valenciana, reforma constitucional.

RECEPCIÓN: 31-05-2018  
REVISIÓN: 27-06-2018  
ACEPTACIÓN: 12-09-2018  
PUBLICACIÓN: 21-01-2019

## SOME CONSIDERATIONS ON VALENCIAN COMMUNITY POWERS IN PRIVATE LAW

**Abstract:** The abolition of the rules of Valencia in 1707 is renewed by the restrictive interpretation of the Constitutional Court on article 149.1.8 of the Spanish Constitution. This occurs against the unequivocal and democratically determined will contained in the Statute of Valencian Autonomy. At present there are sufficient reasons to defend a constitutional reform that offers an adequate response to the demands of the Valencian Community.

**Keywords:** Valencian Civil Law, regional law code, legislative competence, Valencian Government, constitutional reform.

### 1. Brevíssima aproximació històrica

És ben conegut que el Rei Felipe V va abolir els furs del Regne de València en 1707. Ho va fer després d'una guerra successòria, per raons de conquesta, i en la mala excusa d'una deslleialtat dels valencians (que com a molt ho seria d'una part), acompanyada d'una pretesa uniformitat que no obstant no va seguir en altres situacions semblants. I com va donar la dramàtica casualitat de que molts valencians varen recolzar al concursant a la corona que va perdre, acabada la famosa batalla d'Almansa el 25 d'abril, el rei vencedor va concedir als valencians el premi de la derogació de tot el dret foral valencià, en efectes pràctics a partir del 29 de juny de 1707. La literatura sobre els furs i la seua abolició és extensíssima i amb plantejaments de vegades dispars. Entre molts altres, cabe mencionar Martínez Roda, 2014, 101-124; Obarrio Moreno, 2005, 637-662; Masferrer Domingo, 2008; y 2015, 243-272; Palao Gil, 2016, 447-483; 2012, 209-248; 2011, 1885-1903; 2010, 411-428; y 2008, 162-199; Peset Reig, 1972, 657-715; Pérez Puchal, 1952, 179-198; o Romeu Alfaro, 1972, 75-116.

Tots estos acontenyiments han adquirit particular actualitat gràcies a certs avatars històrics. La redacció de l'article 149.1.8 de la Constitució espanyola, per un costat, que enllaça el dret civil propi a l'existència d'un dret foral, i l'interpretació restrictiva que fa del mateix el Tribunal Constitucional, l'abolició dels furs en 1707 –i la no compilació del dret foral valencià–, s'han convertit en la raó per la que al 2016 es declaren inconstitucionals les principals lleis de dret civil valencià, puix es considera incompetent a la Comunitat Valenciana per no contar en un dret foral vigent a l'entrada en vigor de la Constitució espanyola en 1978. En altres paraules, l'abolició dels furs en 1707 ha vingut a impedir esta competència, llevat en els supòsits residuals en els que siga possible acreditar una costum vigent en aquell moment conexas en les matèries regulades, açò és, en determinades qüestions agràries.

Segons el Tribunal Constitucional, resulta irrellevant lo que disponga l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, ni tan sols en la seua redacció de 2006, ni tampoc



importa que el mateix Estatut puga quedar buit de contingut en esta matèria a pesar de ser resultat de la voluntat democràticament manifestada pels valencians i per tots els espanyols. Lo rellevant és que, en la seua interpretació, la referència a l'existència de dret foral equival a vigència en el moment d'entrada en vigor de la Constitució. D'eixa forma, en definitiva, l'abolició dels furs valencians perpetrada pel tan famós Felipe V de Castella i IV de València) impedeix la competència reconeguda democràticament.

En tot cas, no alcança a comprendre's quina uniformitat podria buscar-se i aconseguir-se en l'abolició quan, el 3 d'abril de 1711, el mateix Felipe V va dictar un segon decret exclusiu per al Regne d'Aragó per el que es restablia part del dret aragonés. Per si no fora poc, el decret que va afectar a Balears, de novembre de 1715, va resultar prou més benèvol que el que varen patir els valencians; i lo mateix va passar en el relatiu a Catalunya, de 9 d'octubre de 1715 i efectes de giner del següent any. No se sosté, per tant, cap justificació ancorada en la voluntat unificadora de la corona quan el mateix rei la va trencar en quant va tindre ocasió.

En la base de la derogació es troba, sense dubte, el dret de conquesta, aixina com el caprig i l'exercici arbitrari del poder. Però, ademés, pot observar-se la voluntat de castigar en especial émfasis als valencians, provablement perque el seu dret foral era dels més complets i avançats, i, d'eixa forma, donar exemple preventiu de lo que suponen opondre's al poder absolut del rei.

Lo que va vindre a continuació va ser la sumissió a les lleis de Castella. Més de tres sigles de Còdic Civil en els que els valencians varen tindre temps d'acomodar-se tant que la majoria va oblidar l'ordenament jurídic que varen tindre, sense perjudi de que no faltaren innumerables exemples de valencians que reiteradament sollicitaren la devolució del seu dret propi (Palao Gil 2008, 162-99). La substitució i assimilació havia segut tan fonda que, quan excepcionalment algú tractava el tema dels furs, escassament es concebia com una mera referència a un dret obsolet i irrecuperable.

Els valencians ni tan sols varen ser cridats a compilar un dret que havia segut fulminat en el seu moment. I quan aplega la Constitució, resulta que la competència per a legislar el dret valencià es vincula a l'existència d'un dret foral la vigència de la qual depenia de decisions arbitràries d'un monarca absolut o de la casualitat d'haver segut cridat a compilar el dret foral.

La constitució democràtica inicialment va generar certa expectativa sobre la possibilitat de superar vells agravis i injustícies patides pels valencians en este àmbit. Certament es rehabilità, recuperà i adaptà part del dret foral al nou context constitucional. D'esta manera es va permetre recuperar en lo substancial la competència legislativa sobre aspectes organisiatius de l'estructura política de la Comunitat Valenciana, aixina com, sobretot, en lo referent al dret públic-administratiu. Es recuperen, degudament adaptades, les velles institucions forals d'autogovern relatives al poder eixecutiu i legislatiu, bàsicament, el President de la Generalitat, les Conselleries, i les Corts valencianes. Pel que fa a les competències legislatives, són exercides en regularitat per la Comunitat Valenciana en l'àmbit fonamentalment del dret públic. No obstant, en matèria de dret privat no acabà d'atribuir-se en la suficient claritat en la Constitució. Solament va ser l'Estatut d'autonomia, sobretot despuix de la seua reforma de 2006, quan de forma indubtable es reconeix esta competència legislativa a la Comunitat Valenciana.

## 2. Constitució de 1978 i Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana de 1982

La redacció de l'artícul 149.1.8 de la Constitució espanyola no va ser lo suficientment taxativa com per a impedir interpretacions restrictives del seu tenor literal que impedeixen l'assunció de competències en este àmbit. Dispon que "el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: [...] 8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan".

L'opció legislativa va ser així la de vincular la competència legislativa condicionada a la prèvia existència d'un dret foral. Açò significa que nega de pla la possibilitat d'assumir competències a les comunitats que no hagueren tingut en cap moment dites competències. Esta opció pot ser més o menys convenient o adequada, però en principi no deixava fora a la Comunitat Valenciana, ya que, com és ben conegut, va dispondre fins a 1707 d'un dret foral ple. El problema va ser la concreta redacció del text constitucional que deixava excessiu marge per a que, per mig de determinades interpretacions restrictives, laminara esta possibilitat. Precisament la previsió de l'artícul 149.1.8 *in fine*, referida als drets forals "allí on existixquen" és la que resulta poc expeditiva per a donar solució a la qüestió valenciana posat que, si be va existir un dret foral plenament desenrollat per a l'època, no es trobava vigent en el moment d'entrada en vigor de la Constitució espanyola.

No obstant, al poc temps, es produïx un aconteyiment rellevant. Es promulga la LO 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, on clarament s'assumixen competències en este àmbit. El seu article 31 dispon que "la Generalitat Valenciana tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: [...] Dos. Conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil Valenciano"; además, segons el seu article 40: "la Competencia de los órganos jurisdiccionales en la Comunidad Autónoma Valenciana se extiende: a) En el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y revisión en las materias de Derecho Civil Valenciano".

D'eixa forma, d'un text constitucional poc clar i escassament taxatiu, en referir-se al desenroll competencial "allí on existisca" dret foral, s'aplega a un estatut que manifesta la ferma voluntat d'assumir esta competència. I de fet s'assumix en la Llei 6/1986, de 15 de desembre, de la Generalitat Valenciana, sobre arrendaments històrics valencians. Llei esta en deficiències tècniques tan greus com les que patix la mateixa sentència que coneix de la seua constitucionalitat.

### 3. La Llei 6/1986 sobre arrendament històrics valencians i la STC 121/1992, de 28 de setiembre

La Llei 6/1986 no era un excés de perfecció tècnica precisament. El govern espanyol va plantejar recurs d'inconstitucionalitat respecte dels articles 2.II, 3.2, 9 i Disposició transitòria. I la STC 121/1992, de 28 de setembre, va declarar l'inconstitucionalitat parcial d'esta llei per diversos aspectes, en alguns d'ells de forma no solament adequada sino insuficient, ya que els motius d'inconstitucionalitat eren més greus fins i tot que els declarats pel Tribunal. Aixina i tot, este aspecte obedea a raons tècniques alienes a l'assunció de competències legislatives en matèria de dret civil per part de la Generalitat Valenciana.

L'inconstitucionalitat es basa en el fet de que l'administració pública declara una relació contractual privada, i en l'atribució de la llei autonòmica de competència genèrica per a conèixer de la seua impugnació, coherentment en el caràcter d'impugnació de l'acte administratiu dictat per una administració pública que correspon a esta declaració, als òrgans jurisdiccionals de l'orde contenciós-administratiu. Abdós coses són inadmissibles en una llei autonòmica, pero el Tribunal Constitucional per últim solament considera inconstitucional la segona per tractar-se d'una qüestió processal

la competència de la qual està clarament reservada al legislador estatal. No entra a conèixer sobre el fet de que l'Administració resolga sobre qüestions que formen part de l'àmbit de la potestat jurisdiccional conforme a l'article 117.3 de la Constitució espanyola, per ser una qüestió jurídica privada (Ortells Ramos 2017, 130-1). En eixe sentit, el vot particular del magistrat Gabaldón a esta STC 121/1992 afirma rotundament i en tota raó que:

El reconocimiento por la Administración de la existencia de un contrato civil entre partes, determinante de todas unas consecuencias que afectan no solo a quien solicitó aquel acto sino a los demás titulares de la relación jurídica, quienes además pueden ver modificado el contenido de los derechos que la costumbre o el pacto les confería, no es una actividad propia de la Administración sino una potestad de intervención que esa Ley le otorga más allá de sus propias facultades, invadiendo las que son propias de la Jurisdicción (artículo 117.3 de la Constitución), puesto que función jurisdiccional es la que resuelve conflictos de intereses privados en la esfera del Derecho civil; y ese es el efecto propio del reconocimiento administrativo de los contratos de arrendamientos históricos.

Però la irreprochable i fins i tot insuficient declaració d'inconstitucionalitat res tenia que vore en la competència legislativa sobre el dret civil valencià. No obstant, va ser objecte de recurs en base en els tèmens en que la Constitució espanyola afronta esta qüestió i en l'incompetència legislativa de la Generalitat Valenciana que deriva de la mateixa. El recurs partix de que la competència autonòmica en esta matèria presupon l'existència i també la vigència del dret foral en el moment de promulgar-se la Constitució espanyola, además de que la Llei d'Arrendaments Històrics Valencians caria de sustent en una realitat consuetudinària existent.

La STC 121/1992, de 28 de setembre, a pesar de les dificultats interpretatives (vejan entre els autors que discutixen l'existència d'un dret foral estrictament consuetudinari, Domínguez Calatayud 2013, 161), considera que l'expressió "Drets civils forals o especials" del text constitucional inclou també la costum. Per tal motiu no es nega completament la competència legislativa de la Generalitat en matèria de dret civil, encara que siga en "exclusiva para legislar sobre instituciones que hayan tenido una configuración consuetudinaria específica en su ámbito territorial".

Aixina declara l'inconstitucionalitat parcial mantenint la competència legislativa limitada al dret consuetudinari que ha pogut provar-se. No obstant, encara que siga *obiter dictum*, dona per assentat que el dret foral, inclòs el que haja permeneixcut per via consuetudinària, ha d'existir en el moment d'entrada en vigor de la Constitució espanyola.

#### 4. La reforma de l'Estatut d'Autonomia operada en 2006

A pesar de que la STC 121/1992 en teoria no tancà absolutament la competència legislativa en matèria de dret civil valencià, en la pràctica va supondre buidar de contingut eixa competència. Bona prova d'açò és el fet de que, després de la mateixa i fins a la reforma de l'Estatut de 2006, no es promulgara cap altra Llei de dret civil valencià. Lo ben cert és que la STC 121/1992 va produir resultats clarament insatisfactoris des d'un punt de vista tècnic (Domínguez Calatayud 2013, 166-71); i també des d'un punt de vista polític, social i fins a sentimental, en la mesura que l'interpretació del Tribunal Constitucional suponia atribuir efectes a l'abolició dels furs no derivada precisament de la voluntat democràtica ni de la justícia, sino solament de l'arbitrarietat, la força i el dret de conquesta. La discriminació i l'ofensa, aixina, es mantenen vigents més de tres segles després.

Els valencians, d'eixa forma, poden sentir-se una volta més discriminats i ofesos. I era més que d'esperar que manifestaren la seua voluntat de rehabilitar esta situació en l'Estatut d'Autonomia, per a crear un marc jurídic inclòs en el bloc de constitucionalitat que permetera desbloquejar la situació creada per la STC 121/1992 (Torrejón Puchol 2013, 383). Cosa que es va produir per últim en la reforma de 2006. Segons el seu preàmbul "es motivo de esta reforma el reconocimiento de la Comunidad Valenciana, como Nacionalidad Histórica por sus raíces históricas, por su personalidad diferenciada, por su lengua y cultura y por su Derecho Civil Foral". Açò significa que el dret foral es considera un dels fonaments centrals en els que s'assenta l'identitat valenciana com a nacionalitat històrica (Moliner Navarro 2013, 223). Aixina mateix, el preàmbul deixa clara l'intenció de mantindre esta competència quan reconeix igualment que "pretende también esta reforma el impulso y desarrollo del Derecho Civil Foral Valenciano aplicable [...] Por eso el desarrollo legislativo de las competencias de la Generalitat, en plena armonía con la Constitución Española, procurará la recuperación de los contenidos de «Los Fueros del Reino de Valencia», abolidos por la promulgación del Decreto de 29 de junio de 1707". Açò significa que el dret foral es considera un dels fonaments centrals en els que s'assenta l'identitat valenciana com a nacionalitat històrica (Moliner Navarro 2013, 223). Aixina mateix, el preàmbul deixa clara l'intenció de mantindre esta competència quan reconeix igualment que "pretende también esta reforma el impulso y desarrollo del Derecho Civil Foral Valenciano aplicable [...] Por eso el desarrollo legislativo de las competencias de la Generalitat, en

plena armonía con la Constitución Española, procurará la recuperación de los contenidos de «Los Fueros del Reino de Valencia», abolidos por la promulgación del Decreto de 29 de junio de 1707".

L'article 7 de l'Estatut d'Autonomia arreplega l'idea de "recuperació" del dret foral, cosa que, d'haver-se introduït en el tenor literal de l'article 149.1.8 de la Constitució espanyola, els valencians no es trobarien en l'actual calvari legislatiu. Dispon este precepte estatutari que "el desarrollo legislativo de las competencias de la Generalitat procurará la recuperación de los contenidos correspondientes de los Fueros del histórico Reino de Valencia en plena armonía con la Constitución y con las exigencias de la realidad social y económica valenciana".

I en distintes paraules, pero en el mateix sentit, la Disposició transitòria tercera de l'Estatut reitera que "la competencia exclusiva sobre el Derecho Civil Foral Valenciano se ejercerá, por la Generalitat, en los términos establecidos por este Estatuto, a partir de la normativa foral del histórico Reino de Valencia, que se recupera y actualiza, al amparo de la Constitución Española".

Podria dir-se que la competència s'ancora en el dret foral que es recupera i, a partir d'ella, es regulen les relacions privades dels valencians segons les necessitats de la seua realitat social i econòmica. Així, les referències en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana al dret civil valencià són reiterades: entre uns altres, els articles 3.4, 35.1, 37.2, 49.1.2ª, 58.2 *in fine*. Lo que evidencia la voluntat inequívoca en assumir les competències en matèria de dret civil. Ademés, va ser fruit d'un ampli pacte polític impulsat per les Corts valencianes, ratificat per les Corts Generals, com a norma en ranc de Llei Orgànica que és.

I en desenroll d'estes competències, en l'intenció d'oferir solucions avançades adaptades a la demanda social, es varen promulgar, les lleis de dret civil valencià: Llei 10/2007, 20 març, de Règim Econòmic Matrimonial Valencià; 5/2011, 1 abril, de Relacions Familiars dels fills i filles els progenitors de les quals no conviuen; 5/2012, 15 octubre, d'Unions de fet Formalisades de la Comunitat Valenciana; 3/2013, 26 juliol, de la Generalitat, dels Contractes i altres Relacions Jurídiques Agràries ("D.O.C.V." 31 juliol).

## 5. Recursos d'inconstitucionalitat i sentències del Tribunal Constitucional front al desenvolupament del dret civil valencià

El precedent de la STC 121/1992 va incentivar d'alguna forma els recursos d'inconstitucionalitat front a les lleis de dret civil valencià a pesar de dictar-se en el nou context estatutari, i, lo que és pitjor encara, va vindre a sustentar la resposta que va oferir per últim el Tribunal Constitucional.

### 5.1. La inadmissibilitat del primer recurs d'inconstitucionalitat front a la Llei 10/2007, de Règim Econòmic Matrimonial Valencià

Aixina i tot, mereix destacar-se que es va produir una irregularitat processal en la formulació del primer recurs a la que no es va reconèixer la deguda transcendència. En efecte, la presentació del recurs va ser extemporànea puix es varen superar els tres mesos des de la publicació de la llei establert per l'article 33.1 LOTC, sense perjudici de que pugui ampliar-se a nou mesos quan es complixquen les previsions del punt 2 del citat precepte. Lo que va ocórrer en este cas és que en els tres primers mesos no es va formular objecció sobre la competència de la Generalitat en el desenvolupament del dret civil, sino solament respecte dels articles 15, 17.2, 7.27.2, 30, 33, 37, 39, 42, 46, 47 i 48 de la Llei 10/2007 (Torrejón Puchol 2013, 385-93). Als tres mesos, i en el sí d'una Comissió constituïda se suponia que per a llimar discrepàncies, en lloc d'açò, la representació de l'Estat espanyol va alterar els tèrmins de les discrepàncies, ampliant-les des d'a penes una quarta part dels preceptes de la Llei a tota la Llei mateixa, negant una volta transcorreguts els tres mesos la competència legislativa que no provinga de la prova d'una costum subsistent a l'entrada en vigor de la Constitució espanyola. La qüestió és clara, l'ampliació del termini per sis mesos més és per a resoldre discrepàncies, no per a augmentar-les, i solament si les mateixes no es resolen, permet la presentació del recurs. Per tot això, com va alegar l'advocacia de la Generalitat, el recurs en el seu conjunt incorria en causa d'inadmissió. El Tribunal Constitucional de 12 de juny de 2008, va rebujar de pla estes alegacions, i va admetre el recurs, sense perjudici del vot particular del magistrat Delgado que considerava el recurs parcialment extemporàneu. Per últim, la Sentència estima l'alegació, pero en la pràctica va supondre la seua desestimació puix al final es va anular tota la sentència. Va senyalar el Tribunal Constitucional que "La argumentación esgrimida debe compartirse..." puix "el marco de la discrepancia es el que se establece en el acuerdo sobre iniciación de ne-

gociaciones". Pero dit açò, el citat marc es circumscriu a uns determinats preceptes, i no als motius en els que es fonamentava la discrepància sobre els mateixos. Cosa que li permet concloure que "los requisitos exigidos en el art. 33.2 LOTC se han cumplido respecto a los preceptos expresamente mencionados en el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación de 8 de junio de 2007. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de los restantes impugnados, pues no se contemplaron en el citado acuerdo, lo que determina que, respecto a ellos, no puedan entenderse cumplidos los requisitos exigidos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para hacer posible recurrirlos en el plazo de nueve meses. Por ello no es posible admitir a trámite la presente impugnación en los términos expresados en el suplico del escrito de interposición del recurso, limitándola a los arts. 15, 17.2, 27.2, 30, 33, 37, 39, 42, 46, 47 y 48 de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2007". No obstant, la Sentència oblida que el marc llimitador no solament són els preceptes alegats, sino també la causa que sustenta el recurs, sobre tot quan esta causa permet impugnar no solament els onze preceptes l'impugnació dels quals s'autorisa (i delimita) sino els casi cinquanta del total de la llei. I solament en eixe oblit pot explicar-se que, no havent-se admès l'impugnació d'uns determinats preceptes, casi quaranta, al final resulten afectats per la declaració d'inconstitucionalitat.

El recurs d'inconstitucionalitat no tindria que haver segut admès per extemporàneu. I, si es va considerar admissible respecte dels preceptes els quals es va formular objeccions en els tres primers mesos, va deure ser únicament per la causa en que es fundava, i no en una incompetència que no va ser objectada dins del termini.

### 5.2. La STC 82/2016, de 28 d'abril i la restrictiva interpretació de l'article 149.1.8 CE

La STC 82/2016, encara que no admet l'impugnació de més de la mitat de la Llei, per últim, la declara tota inconstitucional. I açò ho fa obviant qualsevol altra consideració sobre la Llei 10/2007, de 20 de març, de règim econòmic matrimonial valencià, llimitant-se a constatar que obvia la "doctrina" *obiter dictum* establida prèviament en l'anteriorment referenciada STC 121/1992, de 28 de setembre, i llimitava l'àmbit de la competència assumible per la Comunitat Valenciana en matèria de dret civil al "De-recho consuetudinario que, tras la abolición de los Fueros, haya subsistido".

La Sentència es llimita a la qüestió competencial. Part de l'abolició dels furs i, per tant, de l'inexistència d'un dret compilat a l'entrada en vigor de la Constitució, co-

responent a la Generalitat Valenciana acreditar la pervivència de regles consuetudinàries relacionades o a lo manco connectades en l'objecte de la Llei en aprovar-se la Constitució de 1978. I com no s'aporta prova d'una pervivència en tal moment de les costums que pogueren servir de punt de connexió, no hi ha competència. Aixina de simple. Solament basta per a fundar-ho reiterar les idees plantejades inicialment en la repetida STC 121/1992, en essència, que l'article 149.1.8 de la Constitució espanyola no permet desenvolupar la seua competència llevat supòsits molt concrets puix "la expresión 'allí donde existan' referida a los derechos civiles forales o especiales, como presupuesto indispensable para ejercer la competencia legislativa ex art. 149.1.8 CE alude a la previa existencia de un Derecho civil propio (SSTC 28/2012, de 1 de marzo, FJ 3; y 81/2013, de 11 de abril, FJ 4). Una preexistencia que no debe valorarse además con referencia a cualquier coordenada temporal, como se pretende desde la Comunidad Autónoma, sino muy precisamente 'al tiempo de la entrada en vigor de la Constitución' (STC 121/1992, de 28 de septiembre, FJ 1) o 'a la entrada en vigor de la Constitución' (SSTC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 1; y 31/2010, de 28 de junio, FJ 76), sin que sea lícito, remontarse a cualquier otro momento anterior [...] su remisión alcanza no solo a aquellos derechos civiles especiales que habían sido objeto de compilación al tiempo de la entrada en vigor de la Constitución, sino también a normas civiles de ámbito regional o local y de formación consuetudinaria preexistentes a la Constitución y que 'tras la abolición de los Fueros y hasta nuestros días, subsistiera en el territorio de la Comunidad Autónoma, siendo notoria la inexistencia de toda regla escrita que, antes de la Ley hoy impugnada, ordenara en dicho ámbito cualquier instituto civil de modo especial respecto al Derecho común' (STC 121/1992, FJ 1)".

### 5.3. La STC 110/2016, de 9 de juny, sobre la Llei 5/2012, de 15 d'octubre d'Unions de fet formalisades

La STC 110/2016 estima el recurs parcialment, just en la part que conté preceptes de naturalesa civil, per contravindre una volta més el contingut de l'article 149.1.8 CE. Recordem que "el Decreto de nueva planta promulgado el 29 de junio de 1707 supuso la definitiva abolición y derogación de los fueros de Valencia –que nunca se recuperaron, a diferencia de lo ocurrido en otros territorios– concluye que tras casi tres siglos de vigencia del Derecho civil común en aquella Comunidad el Derecho civil valenciano vigente es exclusivamente de carácter consuetudinario, y vinculado esencialmente a costumbres de carácter agrario como la venta *a ull* o *per alfarrassado*, la venta

a peso o *arrovat*, el espigueo o *espigolar*, el *herbatge*, usos en materia de riegos y jurisdicción especial del Tribunal de las Aguas".

El Tribunal Constitucional no pot excusar, per tant, cap sòrt de desconeixement de que està donant cobertura al decret de nova planta, i a la seua derogació per pura arbitrarietat i dret de conquesta. És més, no sembla importar-li atribuir efectes i validea a l'abolició puix reitera el parèixer de l'abans citada STC 82/2016 sobre els articles 149.1.8 CE i 49.1.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana després de la reforma de 2006, reconeixent que "la identidad de la materia y de las alegaciones de las partes obligan, en consecuencia, a seguir los criterios de ese precedente mencionado con las matizaciones oportunas". Aixina, després d'excloure qualsevol interpretació que no siga la senyalada de l'art. 149.1.8 CE, i a la que "ha dado ya respuesta la doctrina de este Tribunal, recogida y reiterada en la STC 82/2016, de 28 de abril", l'exercici de les competències es limita a lo que permeta el repetit article 149.1.8 CE, que, en el cas de la Comunitat Valenciana, "solo podrá ejercerse en la medida en que tal régimen consuetudinario sea efectivamente reconocible sobre el objeto ordenado, hasta la adopción de la Ley hoy impugnada, por la costumbre", interpretació no alterada per la reforma de l'Estatut de 2006. Per últim, exclou qualsevol agravi comparatiu, ja que l'exercici competencial per altres comunitats autònomes és possible "precisamente por cumplir las condiciones establecidas en el art. 149.1.8 CE".

### 5.4. La STC 192/2016, de 16 de novembre, sobre la Llei 5/2011, d'1 d'abril, de relacions familiars dels fills i filles els progenitors dels quals no conviuen

De la mateixa manera que les precedents, la STC 192/2016 obvia entrar en la regulació concreta continguda en la Llei impugnada, i part de la mateixa doctrina referent a l'atribució competencial autonòmica. És més, aplega a reconèixer que "la cuestión sometida a nuestra decisión es, si no idéntica, muy similar a la planteada, por un lado, en el recurso de inconstitucionalidad [...] contra la totalidad de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano, y resuelta en la reciente STC 82/2016, de 28 de abril; y, por otro, en el recurso de inconstitucionalidad [...] contra la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas de la Comunidad Valenciana, y resuelta en la STC 110/2016, de 9 de junio". D'eixa forma, no altera un àpoc la doctrina ja senyalada i que no es va a reiterar per innecessària, per a declarar l'inconstitucionalitat i consegüent nul·litat de la Llei de

les Corts Valencianes 5/2011, d'1 d'abril, de relacions familiars dels fills i filles els progenitors de les quals no conviuen, sense perjudi de la pervivència de les situacions consolidades.

## 6. Efectes immediats de la nul·litat de les lleis per als valencians

La declaració d'inconstitucionalitat de la major part de les lleis de dret civil valencià, basada en la falta de competència per a legislar dels valencians sobre la seua vida íntima, suposar privar-los de la possibilitat de donar solucions adequades als seus problemes específics. El fet de que solament puga legislar-se quan concórrega prova d'una costum, conexas i vigent en el moment d'entrada en vigor de la Constitució, il·lustra de forma tan profunda la capacitat legislativa sobre el dret privat que pràcticament suposar negar la competència, llevat en algunes qüestions relatives a contractes agraris i poc més (segons el Tribunal Constitucional, com hem vist qüestions "como la venta a ull o per alfarrassada, la venta a peso o arrovat, el espiguelo o espigolar, el herbatge, usos en materia de riegos y jurisdicción especial del Tribunal de las Aguas").

Ara bé, totes les declaracions de nul·litat i les derogacions que impliquen no exclouen que el dret civil valencià deixe de ser un dret viu. En efecte, ademés de mantindre la vigència, tot lo residual que es vullga, de la Llei de 3/2013, de 26 de juliol, de la Generalitat, dels Contractes i altres Relacions Jurídiques Agràries, les derogacions legislatives carixen d'efectes retroactius (fonament jurídic 8 de la STC 82/2016, de 28 d'abril; fonament jurídic 10 de la STC 110/2016; i fonament jurídic 5 de la STC 192/2016). Aixina i tot, en este últim supòsit, encara que no implica automàticament la revisió, sembla deixar oberta la porta a revisar la pertinència de la custòdia compartida puix, a diferència dels altres supòsits en els que el seu establiment depenia d'un acord de voluntats entre els cònjuges o convivents, en les relacions patern-filiars, ademés de tractar-se de temes particularment sensibles per afectar directament a menors, es resolen en procediments on l'acord de voluntats no sempre són nota comuna.

En qualsevol cas, casi trescents mil valencianes i valencians es troben somesos a l'aplicació, vigència i efectes de les disposicions de dret civil valencià a pesar d'haver segut declarades inconstitucionals. Són les casades entre l'1 de juliol de 2008 i el 31 de maig de 2016 que mantenen el règim econòmic matrimonial de separació de bens, i els que conviuen com a unió de fet fins al 15 de juliol de 2016 puix mantenen els

efectes civils que els otorgaven les lleis derogades, junt a les parelles a les que se'ls seguix aplicant la coneguda com a Llei Valenciana de Custòdia Compartida.

Tot açò permet afirmar que la declaració d'inconstitucionalitat i consegüent nul·litat de les lleis de dret civil valencià no exclou la seua subsistència i vigència, encara que siga llimitadament.

## 7. Algunes consideracions crítiques

Conseqüència de les tres sentències vistes, l'any 2016 ha segut considerat, en tota raó, com *annus horribilis* per al dret civil valencià (Martínez Sanchis 2016, 1).

Lo pitjor de tot és que l'inconstitucionalitat de les lleis no es basa en qüestions de fondo, sino en l'incompetència de la Comunitat Valenciana per a legislar com a conseqüència de la restrictiva interpretació que fa el Tribunal Constitucional de l'article 149.1.8 CE.

Esta doctrina suposar portar al segle XXI de nou l'abolició dels furs, prorrogant la discriminació que va supondre per als valencians sense una altra raó que la força i l'arbitrarietat.

Els valencians, en este punt al menys, no encaixen en la Constitució espanyola, encara que es produïx més que pel seu text per l'interpretació que fa el Tribunal Constitucional del mateix. L'article 149.1.8 CE dispon que l'Estat té competència exclusiva, entre altres matèries, sobre legislació civil "sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan". I a esta última expressió, el Tribunal Constitucional afig alguna cosa aixina com que l'existència és "en el moment d'entrada en vigor de la constitució", identificant el qualificatiu "existent" en el de "vigent". I encara que abds qualificatius poden guardar certa similitud, no són conceptes idèntics. L'interpretació del Tribunal Constitucional solament és una de les possibles, i, sobretot, resulta en la meua opinió dubtosa i discutible, entre unes altres coses, en base en el contingut del vot particular que discutix la decisió de la majoria íntegra en l'alt Tribunal. Podia perfectament haver-se interpretat, ademés, que el dret foral valencià existix, encara que solament siga com a dret històric i encara que no estiga vigent des de 1707 com

a dret compilat i al marge de la costum. Aixina, puix, de la mateixa manera que equipara existent i vigent, pogué entendre el Tribunal Constitucional que la Constitució espanyola, com a instrument integrador i de reconciliació entre els distints pobles d'Espanya, reconeix l'exercici de legislar en dret civil als valencians a pesar de que el dret foral no estiguera vigent a la seua entrada en vigor, subsanant una de les injustícies històriques que patix el poble valencià.

En definitiva, davant l'alternativa d'interpretacions possibles, crec que pogué i va deure haver imperat l'interpretació integradora i no restrictiva. No en va el text constitucional havent pogut optar per una referència al dret vigent, opta per un altre qualificatiu més ampli i genèric com a "existent". No és irrellevant el fet de que el dret foral fora privat als valencians per la força i per dret de conquesta, sense que, a diferència de lo que va ocórrer en uns altres, mai es reintegrara la seua capacitat legislativa. Açò pot considerar-se una discriminació i un agravi comparatiu que en l'actualitat el Tribunal Constitucional en lloc d'avaluar, va deure subsanar.

Recorde's que, en nombroses Comunitats autònomes, les inicials especialitats que abans de la Constitució arrelgaven les seues normes de dret civil, en base en l'expressió "conservació i desenvolupament" s'han convertit en la gènesi d'un complet sistema de Dret civil propi. Per exemple, en Galícia, els quatre articles que al dret de llaurar i posseir dedicava la seua Compilació de Dret civil, vigent al temps de promulgar-se la Constitució espanyola, han permés una casi completa regulació de la matèria hereditària en dita Comunitat (Milz Ramón 2016, 1).

A la fi, esta interpretació constitucional és tan poc sensible cap a els qui patixen discriminació i agravi comparatiu que pot ser entesa com una mostra més del tradicional desconeiximent i escàs respecte cap als valencians i les seues necessitats.

### 8. Raons que amparen les aspiracions competencials de la Comunitat Valenciana en matèria de dret civil

Les raons que amparen les aspiracions competencials de la Comunitat Valenciana en matèria de dret civil són tècniques, històriques, socials i culturals, de justícia, i, sobretot, pràctiques.

### 8.1. Raons tècniques: els vots particulars de José Antonio Xiol Ríos

Com s'ha al·lunyat, i vorem ara en major atenció, era possible una altra interpretació més correcta de l'article 149.1.8 CE. Els vots particulars del magistrat José Antonio Xiol Ríos permeten comprovar la fonamentació i justificació de la competència reguladora de la Comunitat Valenciana sobre el dret civil, a lo manco sobre les raons d'incompetència en que es basen les impugnacions del govern espanyol. Per tant, des d'un punt de vista de tècnica-jurídica, fins i tot en major fonament que el mantingut per a l'estimació dels recursos, podien o devien haver-se desestimat els recursos d'inconstitucionalitat.

El vot particular a la STC 82/2016, de 28 d'abril, reiterat, en lo essencial, en les posteriors SSTC 110/2016 i 192/2016, aporta una bateria d'arguments que poden resumir-se en els següents punts: l'importància de la reforma de 2016 a l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana; la doctrina del Tribunal Constitucional reconeix els drets històrics en matèria d'institucions privades quan es consagren en un estatut d'autonomia; dins de les competències ordinàries en matèria de Dret civil, la Comunitat Valenciana pot regular esta matèria; i deuria haver-se respectat la pervivència dels preceptes impugnats forma de determini.

La profunditat i exhaustivitat del fonament dels vots particulars es presenta indiscutible. En comparació al parèixer de la majoria del Tribunal, resulta clarament superior. Justifica degudament una alternativa interpretativa del tenor de l'article 149.1.8 CE més d'acort en l'esperit de la mateixa Constitució i fins i tot en la pròpia doctrina del Tribunal Constitucional. Podrien destacar-se arguments com que una actualització del dret foral no té sentit si no es referix a sistemes no vigents a l'entrada en vigor CE, puix en tal cas solament caldria parlar-se de conservació; en la STC l'afirmació de vigència a l'entrada CE sempre ha segut en caràcter merament *obiter dictum*; equiparar vigència i existència és frut d'una concepció restrictiva, i no és eixa la línia que seguix la pròpia Constitució; no tots els drets reconeguts en País Vasc i Navarra estaven vigents a l'entrada CE; o, l'expressió "allí on existixquen" ha de fer referència a dret foral en el seu conjunt, cosa que es dona en la Comunitat Valenciana puix existix dret foral ja reconegut per via de dret consuetudinari i, per tant, competència de la Generalitat, sobretot quan la Constitució reconeix la vitalitat cap al futur. I com tot es complix en la Comunitat Valenciana, reconeguda la vigència del dret foral, encara que siga per la via de la costum provada, el dret civil podrà desenvolupar-se, modificar-se i ampliar-se. En definitiva, entén el dret foral no com una qüestió residual sino com un sistema normatiu dotat de sistematització i connexió interna.

## 8.2. Raons històriques

L'independència del Regne de València implicava contar en un ordenament jurídic propi per a regular tots els àmbits de la vida social, siga en lo públic com en lo privat, açò és, els furs, que contenien un conjunt normatiu per a regular tots els àmbits de la vida en el Regne. Posteriorment les Corts valencianes els varen ampliar, modificar i desenvolupar, per a adequar-los a la societat valenciana, fins que varen constituir un cos normatiu particularment avançat. Este cos normatiu donava resposta jurídica a totes les necessitats que es generaven en aquell context històric, incloses les relacions més íntimes de les persones com els drets i obligacions entre particulars, qüestions familiars o les successions. Tot fins que, com s'ha senyalat, en l'any 1707 els furs varen patir tan ingrata com a injusta abolicció, en la consegüent substitució pel còdic civil del regne veí per l'oest.

Posteriorment, quan en 1889 es va acordar que entraren en la Comissió de Codificació representants de les regions que conservaven drets forals, no es va convidar a cap representant valencià a pesar d'haver contat en tot un sistema de dret foral. Com a resultat, l'article 1976 del Còdic Civil dispon que "quedan derogados todos los cuerpos legales, usos y costumbres que constituyen el Derecho civil común en todas las materias que son objeto de este Código, y quedarán sin fuerza y vigor, así en su concepto de leyes directamente obligatorias, como en el de derecho supletorio". Precepte que, per si no havia segut suficient en l'abolicció, de nou insistix en derogar el dret foral valencià que podia haver-se mantingut subsistent fins i tot en forma de costum. Tot açò com a precedent a les decisions del Tribunal Constitucional que hem vist i que tornen a cercenar les il·legítimes aspiracions dels valencians per a regular un dret civil propi.

Pot dir-se que la tirania va abolir els furs de València i no els va tornar, ni, una altra tirania va tindre a be reconèixer-los com havia fet en altres llocs. Per últim, ja en democràcia, en lloc de rehabilitar este agravi als qui no han parat de ofrenar glòries a Espanya i que històricament han segut més solidaris en este i en altres punts, es dona carta de naturalesa a l'imposició per la força i a l'arbitrarietat en l'interpretació feta a l'article 149.1.8 CE, a pesar de la voluntat democràtica dels valencians primer en les Corts valencianes, i, per últim, per tots els espanyols en el parlament espanyol en aprovar l'Estatut d'Autonomia.

## 8.3. Raons de justícia

El Regne de València va ser privat de la seua capacitat legislativa i de tot el seu dret propi com a conseqüència d'una guerra de successió a la corona en la que alguns, pocs o molts, pero no tots els valencians, es varen posicionar a favor del que va perdre. I com a represàlia davant este error estratègic, per la força, per dret de conquesta i, en definitiva, per l'arbitrarietat i la tirania del monarca, el dret foral va ser injustament derogat de colp i jamai tornat. Cosa que, en canvi, no va ocórrer en altres llocs en els que concorrien circumstàncies similars, on no va haver derogació, no va ser tan profunda o, en tot cas, el dret va ser per últim rehabilitat.

Tot açò es va produir com a conseqüència de l'arbitrarietat, i, a continuació, de l'injustícia seguida de la desigualtat i l'agravi comparatiu, sempre alié a la democràcia o a qualsevol pretesa uniformitat entre els "súbdits".

Els valencians varen reivindicar reiteradament la devolució dels furs (Palao Gil 2008, 162-199). I, en qualsevol cas, quan els valencians han pogut expressar-se democràticament ho han fet sempre reclamant l'exercici de la competència, com en els projectes d'Estatut d'Autonomia de l'II República, i, despuix de la vigent Constitució, en l'Estatut de 1982 i, en particular intensitat, en la seua reforma de 2006.

Si en l'arribada de la democràcia es suponen que havien de reparar-se les injustícies, superar les desigualtats i rehabilitar els drets, no s'explica llastrar les possibilitats que oferix l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per a regular el dret civil valencià. Es així, sobretot, perquè no permetre esta competència suponen donar preferència a l'injustícia i l'arbitrarietat que varen provocar no tindre un dret foral escrit vigent a l'entrada de la Constitució espanyola, front a la voluntat democràtica per a superar tals injustícies. La justícia no solament permetia sino que exigia no recórrer les lleis valencianes de dret civil. I, en cas de formular-se recurs, el Tribunal Constitucional, en lloc d'agarrar-se a una discutible interpretació ancorada merament en la literalitat d'un precepte ademés de reflotar un substrat centraliste i insensible, deuria haver tingut l'altura d'aportar una interpretació en la que primara la rehabilitació i la reparació de situacions derivades de l'injustícia i la desigualtat. Calia esperar més d'un Tribunal Constitucional sobre la defensa de la justícia, els valors democràtics i l'igualtat. Sobretot ha de ser aixina quan l'estricta i fins a restrictiu criteri del Tribunal Constitucional no ha influït en multitud d'altres lleis autonòmiques pel fet de no haver sigut impugnades (Verdera Server 2016, 1).



#### 8.4. Raons socials i culturals

El dret civil s'enquadra entre els elements que definixen la Comunitat Valenciana com a nacionalitat històrica. Igualment, el paràgraf dècim tercer del preàmbul de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana deixa clar que "pretén també esta reforma l'impuls i desenvolup del Dret Civil Foral Valencià aplicable... Per això el desenvolup legislatiu de les competències de la Generalitat, en plena harmonia en la Constitució Espanyola, procurarà la recuperació dels continguts de «Els Furs del Regne de València», abolits per la promulgació del Decret de 29 de juny de 1707".

D'un altre costat, en la derogada Llei 6/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Reconeixement, Protecció i Promoció de les Senyes d'Identitat del Poble Valencià, concretament en el punt g) del seu article 6, es reconeixia al dret civil valencià entre les senyes d'identitat del poble valencià.

El dret foral i, per derivació, el dret civil valencià, es considera com a valor identitari que contribuïx a definir a la Comunitat Valenciana com a nacionalitat històrica, per ser una de les traces que permeten als valencians reconèixer-se a sí mateixos i a definir la seua identitat respecte d'uns altres pobles. Aixina, el desenvolup del dret civil valencià representa un cert valor cultural de cohesió que, d'alguna forma, servix per a vertebrar la Comunitat Valenciana. Sent aixina, es presenta certament aconsellable que les nostres institucions el defenguen en la mesura de les seues possibilitats.

#### 8.5. Raons pràctiques

L'exercici del dret civil per la Comunitat Autònoma es presenta com la forma més idònea per a regular el dret privat en qualitat segons les específiques condicions i necessitats dels mateixos valencians.

La simple comprovació de les matèries sobre les que tractaven les lleis de dret civil valencià anulades i declarades inconstitucionals permet comprendre que s'han regulat qüestions que no havien rebut una deguda atenció. És el cas del règim matrimonial més demandat i, d'un altre costat, llògic sobretot en el context social actual; de les relacions familiars dels fills i filles els progenitors dels quals no conviuen, oferint en cas de ruptura una atenció a les relacions familiars en general més d'acort en l'igualtat

del progenitors que menys inconvenients els plantegen i, sobretot, més favorables per als fills i filles; o les unions de fet formalitzades, oferint una regulació a la forma en que les parelles majoritàriament s'organitzen actualment, a lo manco en els inicis de les relacions sentimentals. En fi, nombroses qüestions que afecten als valencians en la seua vida quotidiana, entre altres àmbits, quan es casen, tenen fills, s'unixen en parella, o es separen, podrien rebre un tractament més actual i socialment avançat solament en que es complira l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Pot afirmar-se, en definitiva, que el dret autonòmic en general és capaç de prestar atenció específica a aquells problemes de les relacions privades, en primer lloc, omeses pel legislador estatal; i també, en segon, lloc, permetent oferir un tractament més modern, propenc, immediat, adequat, socialment més avançat, i, en general, de major qualitat per a regular les necessitats específiques dels valencians.

#### 9. Possibilitats de recuperar la competència legislativa en matèria de Dret Civil Valencià

Vàries són les possibilitats en les que conta la Comunitat Valenciana per a, segons es mire, mantindre o recuperar la competència en matèria de dret civil valencià. La primera és esperar a que el Tribunal Constitucional en un incert futur pugui canviar el seu criteri interpretatiu. Però esta opció genera escasses o nul·les expectatives. Ademés, seria necessari seguir legislant per a que, una volta impugnades dites lleis, el Tribunal poguera revisar la seua restrictiva interpretació.

Justament una altra estratègia podria ser continuar promulgant lleis per a tindre dret civil valencià mentres no es presenten eventualment recursos i, en tal cas, fins que per últim el Tribunal Constitucional es pronuncie. Açò seria alguna cosa semblat a lo que ha vingut fent la mateixa Generalitat durant anys en les valoracions d'immobles en relació en l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i els corresponents pronunciaments del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana al respecte. Però esta permanent interinitat presenta no obstant seriosos inconvenients que no la fan recomanable: des de l'inseguritat jurídica, a lo manco transitòria, que genera, fins a patents problemes ètics i estètics, en el desprestigi institucional que produiria.

Una alternativa més viable podria ser la regulació jurídic-privada a través de títols competencials distints a la legislació civil, tal i com es va establir en la STC 37/1987, de 26 de març, sobre determinats preceptes de la Llei andalusa 8/1984, de 3 de juliol, de Reforma Agrària. Es tractaria de buscar fórmules en el dret civil inherent al desenvolupament de les pròpies competències autonòmiques, com en matèria de protecció de la família i del menor, per a salvar a lo manco part de la regulació declarada inconstitucional (Plaza Penadés 2016, 1). No obstant, la mateixa jurisprudència del Tribunal Constitucional ha vingut tancant les possibilitats que oferia esta via per a legislar en matèria de dret civil (Verdera Server 2016, 1).

Lo ben cert és que les anteriors possibilitats es presenten incertes i, una volta agotada la via interpretativa de l'article 149.1.8 CE pel Tribunal Constitucional, les solucions viables podrien consistir be en la realització d'una nova transferència competencial a l'ampar de l'art. 150. 1 o 2 CE, per supost, quan la mateixa permet a la Comunitat Valenciana tindre les mateixes competències en Dret Civil propi que el restant de Comunitats en dret compilat; be en la reforma Constitucional, siga en un canvi puntual i específic per a la Comunitat Valenciana o dins d'un canvi més ampli de la CE. L'objecte d'esta reforma seria modificar el criteri constitucional d'atribució de la competència legislativa civil, potser també per a reconèixer-li-ho a les comunitats autònomes que l'assumixquen en els seus Estatuts d'Autonomia, desvinculant-ho aixina de qualsevol idea de tutela del dret foral civil.

Davant esta alternativa, des del punt de vista de la Comunitat Valenciana, els seus antecedents forals i la forma en que varen ser abolits els furs, la via de l'article 150 CE es presenta com a inacceptable perquè supondria, de fet, reconèixer que la Comunitat Valenciana carix d'eixa competència (Alcaraz 2016, 1). En qualsevol cas, es presenta com més justa (Plaza Penadés 2016), i és l'única solució permanent i segura per a vo-rejar les ambigüitats i incertituds interpretatives que genera l'actual literalitat de l'article 149.1.8 CE.

De destacar la qualificada opinió de qui va ser president del Tribunal Constitucional, Pascual Sala (Sala 2018, 1), quan reclama un:

Proceso de reforma constitucional que aborde [...] la competencia de mi comunidad para legislar en materia de Derecho Civil; competencia que reconoce su Estatuto reformado en 2006 en 7 artículos, que concitó una gran unanimidad política en el Congreso de los Diputados y que, con una interpretación estricta de la competencia estatal sobre legisla-

ción civil y de la subsistencia «de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan» (artículo 149, 8° de la Constitución), no ha reconocido el Tribunal Constitucional al anular tres leyes dictadas por la Generalitat Valenciana en materia de régimen matrimonial, custodia compartida y parejas de hecho. ¿Por qué cercenar esta aspiración legítima y estatutaria en un país que nunca ha tenido ni va a tener unidad legislativa civil y cuyas legislaciones civiles autonómicas nada tienen que ver con las antiguas Compilaciones? Podría perfectamente devolverse esa competencia a los valencianos, igual que la tienen otros 15 millones de españoles de Aragón, Navarra, Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco, mediante una actualizada reforma de los términos en que viene redactada la competencia estatal sobre legislación civil acabada de mencionar, que para nada desvirtuaría el núcleo de las reglas que garantizan los elementos básicos que, en el mismo precepto, delimitan la competencia estatal sobre la materia.

Sense dubte, la Constitució espanyola no sols pot modificar-se quan es considere oportú, sino que de fet ja s'ha modificat a data de hui en dos ocasions. La primera es va realitzar en l'any 1992 per a adaptar l'article 13.2 de la CE al contingut de l'article 8.B del Tractat de l'Unió Europea; la segona, el 27 de setembre de 2011 per a modificar la redacció de l'article 135 de la Constitució per a introduir el concepte d'estabilitat presupostària, aixina com que el pagament del deute públic siga prioritari front a qualsevol altra despesa de l'Estat en els presuposts generals, sense esmena o modificació possible.

És palés que la reforma constitucional en Espanya és possible quan conte en la voluntat política suficient per a que la mateixa es produïxa. Per ad això, com senyalava, la pròpia constitució conté la regulació per a la seua reforma en els articles 166 a 169 CE.

Des d'un punt de vista estratègic, en el "Informe per a una possible reforma constitucional que done cabuda a la competència legislativa civil de la Generalitat Valenciana", elaborat per Luis-Miguel Higuera Luján, advocat valencià i membre de la "Associació de Juristes Valencians", s'opta per una de les possibles opcions per a solucionar el problema competencial. Esta opció, sempre incloent una solució per a la Comunitat Valenciana, convé que també alcance a altres comunitats autònomes en competència legislativa en dret privat, per eliminar les restriccions actuals per raó de la matèria. Es considera més adequada per ser més realista al vincular l'específic cas valencià en l'interés més general, de manera que permet un tractament adequat que, a la seua volta, pugua resultar atractiu per a altres Comunitats en competència reconeguda i, per tant, a major número de grups polítics.

Atenent la doble funció del dret foral en l'article 149.1.8° CE per a determinar les Comunitats que poden assumir esta competència, aixina com també l'àmbit material sobre la que s'exerceix, les Comunitats en competències sobre el dret civil compartixen igualment part del problema de la Comunitat Valenciana despuix de les tan repetides sentències del Tribunal Constitucional. És així en quant les mateixes seguiran estant someses a possibles recursos en base en preteses extralimitacions en el desenvolupament del seu propi Dret Civil, fins i tot més allà de l'idea de conexió que ha segut interpretada flexiblement. Açò permet fer causa comuna a la Comunitat Valenciana i al restant de comunitats autònomes en dret civil propi, a través de vincular la competència a la recuperació i actualització del seu dret privat històric dins del marc constitucional, sempre que s'arregle d'eixa manera en els seus corresponents estatuts d'autonomia. Sent aixina, es mantindria l'opció constitucional pel dret foral per a determinar l'àmbit subjectiu de les autonomies en capacitat per a assumir la competència, evitant les previsibles resistències davant la possible dispersió legislativa derivada de la supressió del còdic civil comú, pero el dret foral deixaria de representar un element restrictiu per la matèria, en ampliar-se l'àmbit material en tot allò no reservat expressament a l'Estat. D'esta manera, devindria en irrellevant l'interpretació de l'art. 149.1.8° CE oferida pel Tribunal Constitucional que ve a equiparar "existència" i "vigència", degut a que el reconeixement de la recuperació i actualització del dret històric en la mateixa Constitució implicaria necessàriament incloure com a referent constitucional al dret privat no vigent.

Per a això be podrà modificar-se l'article 149.1.8° CE, per a que deixe clar que no autorisa solament el desenvolupament del dret foral allí on existisca, sino també la seua recuperació i actualització; be introduir un nou paràgraf segon a la Disposició Adicional Segona de la CE, per a incorporar una especificació declarativa de la fórmula continguda en l'art. 149.1.8° CE. Pero en este cas sense marge d'interpretació al Tribunal Constitucional en un altre sentit que no siga el d'admetre la competència legislativa de la Comunitat Valenciana, sense limitacions per raó de la matèria, i, además, sense tindre que modificar cap Estatut que no arregle expressament la menció al Dret Històric. Tot això "conforme als valors i principis constitucionals".

Certament qualsevol reforma constitucional exigix que els representants polítics dels valencians primer –i de tots els espanyols despuix– tinguen voluntat política per a incorporar esta qüestió en l'agenda de la reforma constitucional. Esta qüestió no està exenta de dificultats, sobretot atenent la tradicional falta d'influència política dels va-

lencians i, dit de pas, la falta de respecte que es demostra cap als seus interessos des dels òrgans de poder espanyols. En tot, per moltes que siguen les dificultats, sense dubte poden ser superades solament en el suficient encabotament i sensibilitat.

## Bibliografía

- ALCARAZ, Manuel. "Derecho Civil valenciano y reforma constitucional", *Valencia Plaza*, (diciembre 2016), <http://valenciaplaza.com/derecho-civil-valenciano-y-reforma-constitucional> (consultat el 5 d'abril de 2018).
- DOMÍNGUEZ CALATAYUD, Vicente. "La competencia de la Generalitat para legislar en materia de Derecho Civil valenciano", VV.AA., *Cuatro estudios sobre la competencia de la Generalitat Valenciana para legislar en materia de Derecho Civil*, València, Tirant Lo Blanch, 2013, 99-215.
- MASFERRER DOMINGO, Aniceto. *La pervivencia del derecho foral valenciano tras los Decretos de Nueva Planta: contribución al estudio de la práctica forense del siglo XVIII*, 2008.
- . "Del Fracaso recopilatorio a la pérdida definitiva del derecho foral valenciano (1707-1804)", *Revista de Dret Històric Català*, 14, 2015, 243-272.
- MARTÍNEZ RODA, Federico. "El Derecho común y la supresión de los Fueros de Valencia", *Revista de Estudios Políticos*, 163, 2014, 101-124.
- MARTÍNEZ SANCHIS, Nuria. "A propósito de la custodia compartida", *Valencia Plaza*, 19 de diciembre de 2016, <http://valenciaplaza.com/a-proposito-de-la-custodia-compartida> (consultat el 4 d'abril de 2018).
- MILZ RAMÓN, Jorge Antonio. "¿Derecho Civil valenciano? Hay que cambiar el artículo 149.1.8° de la Constitución", *Valencia Plaza*, 15 de noviembre de 2016, <http://valenciaplaza.com/derecho-civil-valenciano-hay-que-cambiar-el-articulo-14918-de-la-constitucion> (consultat el 21 de març de 2018).
- MOLINER NAVARRO, Rosa. "El razonable ejercicio de la competencia por parte del legislador valenciano en materia de derecho civil: las tres primeras leyes civiles forales", VV.AA., *Cuatro estudios sobre la competencia de la Generalitat Valenciana para legislar en materia de Derecho Civil*, València, Tirant Lo Blanch, 2013, 217-379.
- OBARRIO MORENO, Juan Alfredo. "El valor de la costumbre en el Reino de Valencia", *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coruña*, 9, 2005, 637-662.
- ORTELLS RAMOS, Manuel. "La potestad jurisdiccional", VV. AA., *Derecho Procesal. Introducción*, Cizur Menor, Thomson-Reuters Aranzadi, 2017, 117-44.
- PALAO GIL, Francisco Javier. "La integración del Derecho histórico en el desarrollo del moderno Derecho civil valenciano", *Iura vacconiae: revista de derecho histórico y autonómico de Vasconia*, 13, 2016, 447-483.
- . "Entre Furs y Estatut. Notas sobre la experiencia histórico-jurídica valenciana y su recepción tras la Constitución de 1978", *Revista valenciana d'estudis autonòmics*, 57, 2012, 209-248.

- PALAO GIL, Francisco Javier. "La insuficiencia de la costumbre como vía para el desarrollo del derecho civil valenciano", *Estudios jurídicos en homenaje a Vicente L. Montés Penadés*, (coor.: Blasco), 2, 2011, II, 1885-1903.
- . "Del giro de 1705 a la ocasión de 1707: génesis del decreto de abolición de los Fueros de Valencia y Aragón", *Trabajo, contrato y libertad: estudios jurídicos en memoria de Ignacio Albiol*, (coor.: Goerlich, y Blasco), 2010, 411-428.
- . "Del derecho foral al derecho civil valenciano: historia y evolución de una reivindicación secular", *Revista valenciana d'estudis autonòmics*, 51, 2008, 162-199.
- PESET REIG, Mariano. "Notas sobre la abolición de los fueros de Valencia", *Anuario de Historia del Derecho Español*, 42, 1972, 657-715.
- PÉREZ PUCHAL, Pedro. "La abolición de los fueros de Valencia y la Nueva Planta", *Saitabi*, 12, 1962, 179-198.
- PLAZA PENADÉS, Javier. "Soluciones a la Sentencia del Tribunal Constitucional contra el Derecho civil valenciano y su régimen económico matrimonial", *Valencia Plaza* (maig 2016), <http://valenciaplaza.com/y-ahora-que-hacemos> (consultat el 4 d'abril de 2018).
- ROMEU ALFARO, Sylvia. "Los fueros de Valencia y los fueros de Aragón", *Anuario de Historia del Derecho Español*, 42, 1972, 75-116.
- SALA, Pascual. "Una reforma constitucional para los de dentro", *Levante env*, (febrer de 2018).
- TORREJÓN PUCHOL, Jesús Emilio. "Los recursos de inconstitucionalidad contra las tres primera leyes civiles forales valencianas posteriores a la reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana del año 2006, y sus incidencias", VV. AA., *Cuatro estudios sobre la competencia de la Generalitat Valenciana para legislar en materia de Derecho Civil*, València, Tirant Lo Blanch, 2013, 381-423.
- VERDERA SERVER, Rafael. "¿Otra vía muerta? El alcance de las llamadas competencias funcionales o conexas en la interpretación del Tribunal Constitucional", *Derecho Civil Valenciano*, (diciembre 2016), <http://derechocivilvalenciano.com/revista/numeros/20-segundo-semestre-2016/item/223-el-alcance-de-las-llamadas-competencias-funcionales-o-conexas-en-la-interpretaci%C3%B3n-del-tribunal-constitucional>, (consultat el 5 d'abril de 2018).

MARÍA ÁNGELES CARABAL-MONTAGUD,  
BLANCA DE MIGUEL MOLINA Y  
VIRGINIA SANTAMARINA CAMPOS

**Los gremios artesanales de la ciudad de  
Valencia: pasado y presente**